

HABILITACIÓN PARA AUMENTAR LA INVERSIÓN PRIVADA

(TC-93-01-18-6)

RESUMEN EJECUTIVO

**BENEFICIARIOS/
ORGANISMO
EJECUTOR:** La Comisión de Servicios Públicos (PUC) y la Comisión de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de las Bahamas (Comisión BEST); Oficina del Primer Ministro.

OBJETIVO: El objetivo específico es lograr la plena operatividad y eficacia de la Comisión de Servicios Públicos y del organismo nacional para el medio ambiente, la Comisión de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de las Bahamas (Comisión BEST).

FINANCIAMIENTO:

Modalidad:	Donación
Beneficiario:	US\$ 679.500
FOMIN:	<u>US\$1.342.900</u>
Total:	<u>US\$2.022.400</u>

**CALENDARIO DE
EJECUCIÓN:**

Período de ejecución:	24 meses
Período de desembolso:	30 meses

**EXAMEN
AMBIENTAL:** El Comité de Medio Ambiente e Impacto Social estudió el documento el 6 de marzo de 1998 e hizo presente su apoyo al enfoque sistemático e integral del desarrollo del marco normativo de la privatización respaldado por la Cooperación Técnica, que reconoce la necesidad de integrar las reglamentaciones ambientales con los aspectos económicos y técnicos del marco normativo.

**CONDICIONES
ESPECIALES
PREVIAS AL
DESEMBOLSO:** La condición especial previa al primer desembolso es el nombramiento de los dos coordinadores (de la Comisión BEST y de la Comisión de Servicios Públicos) aprobados por el Banco y la presentación de un plan de acción de seis meses.

**OTRAS
CONDICIONES
ESPECIALES:** Para todo desembolso que exceda el 40% de los fondos correspondientes al componente I se requerirá prueba de que el Gobierno de las Bahamas ha aprobado el reglamento de las enmiendas a la Ley sobre la Comisión de Servicios Públicos y de que ha nombrado a un regulador para encabezar la Comisión. El desembolso de fondos para el componente II, subcomponente 2, está condicionado al reclutamiento y contratación de dos profesionales en el organismo ambiental, en el marco de las actividades del subcomponente 1.

I. ELEGIBILIDAD DEL PAÍS

- 1.1 El 22 de mayo de 1995 el Comité de Donantes declaró que las Bahamas era elegible para recibir toda modalidad de financiamiento del FOMIN.

II. MARCO DE REFERENCIA

A. Marco general

- 2.1 El Gobierno de las Bahamas desea perfeccionar la reglamentación de los servicios públicos y fortalecer la ordenación ambiental antes de profundizar la liberalización económica y los ajustes estructurales iniciados a mediados de 1993. Entre las medidas de política aplicadas en los últimos cinco años se encuentran las siguientes: venta de hoteles y un banco comercial, participación del sector privado en ciertos servicios públicos, liberalización del transporte aéreo interno y de la radiodifusión, reformas de los regímenes de inversión extranjera y comercio exterior, y fortalecimiento del mercado de capitales. Estas medidas de política fueron consecuencia de recomendaciones formuladas en una operación propuesta por el Banco en 1992, pero que el Gobierno de las Bahamas deseaba poner en práctica por cuenta propia y a su propio ritmo.
- 2.2 En el sector de servicios públicos, el Gobierno de las Bahamas ha avanzado hacia una liberalización en etapas de sus políticas en materia de abastecimiento de agua, electricidad y servicios de telecomunicaciones no básicos. En particular, se ha permitido al sector privado instalar en el país una planta de tratamiento de aguas; en una de las islas principales se ha privatizado totalmente la generación, distribución y transmisión de electricidad; y se ha permitido la competencia privada limitada en telecomunicaciones. El efecto de estas medidas de liberalización ha sido el ingreso de nuevos actores al mercado, lo que ha traído algunos elementos de competencia a la economía.
- 2.3 Desde su reelección en 1997, el Gobierno de las Bahamas ha acelerado la actividad de privatización en el sector de los servicios públicos. La privatización ha progresado más en las compañías de telecomunicaciones y electricidad, y se espera que a principios de 1999 ya esté preparada para la venta la compañía de telecomunicaciones. La privatización del sector de electricidad se ha demorado algo debido a la atención prestada al sector de telecomunicaciones. El Gobierno de las Bahamas también tiene interés en fomentar una mayor participación del sector privado en los sectores de agua y desechos sólidos.

- 2.4 La decisión del Gobierno de las Bahamas de privatizar la compañía de telecomunicaciones fue aprobada por el Parlamento en marzo de 1998. Al respecto, se ha concedido un contrato de asesoría a una firma consultora internacional para que, entre otras cosas, preste asesoramiento sobre métodos de privatización, reglas para el organismo normativo, estudio y análisis de la actual estructura tarifaria, preparación de documentos de licitación y asistencia para la evaluación de las ofertas recibidas. Las autoridades consideran que se necesitaría más asistencia técnica en el sector de telecomunicaciones para convertir los informes de los consultores en documentos de política para tomar acción.
- 2.5 Excepto en lo que se refiere al sector de telecomunicaciones, el Gobierno de las Bahamas no ha formulado una política de privatización de los servicios públicos. No obstante, el gobierno desea iniciar la capacitación del personal para el organismo normativo a medida que se formulan las opciones de privatización y las normas ambientales (véase más adelante). El gobierno reconoce el valor de contar con un organismo normativo independiente y eficaz en el proceso de privatización y tiene sumo interés en establecer un organismo normativo plenamente funcional antes de seguir avanzando con el proceso de privatización.
- 2.6 En el sector ambiental, el gobierno ya ha establecido un organismo de coordinación ambiental que precisa apoyo en materia de desarrollo de políticas y fortalecimiento institucional para asegurar que las repercusiones ambientales del desarrollo económico se incorporen institucionalmente a la política. La necesidad de fortalecer la ordenación ambiental se torna más urgente aún por la privatización inminente de ciertos servicios públicos a fin de regular las actividades futuras y también evaluar las condiciones ambientales actuales que puedan requerir medidas de mitigación. Además, mientras que en el país no es grave la degradación ambiental, el desarrollo físico ad hoc, el aumento del turismo, la importante expansión de las inversiones relacionadas con el turismo, los aspectos relativos a los recursos hídricos y los problemas de capacidad institucional están comenzando a afectar los recursos ambientales y naturales.
- 2.7 Los organismos normativos de los servicios públicos y los organismos ambientales eficaces fortalecerían la competitividad económica y permitirían una mayor inversión privada. Contar con un organismo normativo independiente que apruebe las tarifas de los servicios públicos y emita licencias para su explotación, junto con auditorías ambientales, hará que la inversión en los servicios públicos sea más atractiva. Además, un organismo ambiental eficaz también hará que sean más atractivas las inversiones en otras áreas en las islas que integran las Bahamas, por la seguridad de protección ambiental que ofrecerá. Junto con el sistema de información geográfica que se está formulando (véase más adelante), la operación propuesta también contribuirá al eventual desarrollo

de un programa de planificación del uso de la tierra y proporcionará la base para la obtención de información ambiental.

- 2.8 El grupo del Banco está ayudando al gobierno en una serie de actividades complementarias del proceso de privatización. Ya se ha prestado asistencia técnica para la privatización de los servicios básicos de telecomunicaciones. Mediante un préstamo financiado por el Banco, una firma consultora internacional presentó un informe en enero de 1996 en el cual recomendaba opciones en cuanto al marco normativo para la privatización del sector de electricidad. El Gobierno de las Bahamas aún no ha tomado una decisión puesto que aguarda el resultado de la privatización de la compañía de telecomunicaciones y la experiencia resultante de ello. Mediante una operación de cooperación técnica aprobada recientemente se formulará el sistema de información geográfica en el país, que incluirá información sobre recursos ambientales y de infraestructura. El Banco también está preparando dos préstamos de inversión en los sectores de agua y desechos sólidos que ayudarían a definir mejor las opciones de privatización del gobierno. Se espera que ambos préstamos sean aprobados en 1998 y la operación propuesta podría dar al organismo normativo mayor independencia del proveedor de servicios, respaldando el establecimiento de un organismo normativo autónomo con presupuesto independiente.

B. La reglamentación de los servicios públicos

- 2.9 El Gobierno de las Bahamas desea emprender un programa que le permita aumentar la inversión privada en los servicios públicos a fin de promover la eficiencia, la competencia y los servicios de mayor calidad y, a la vez, continuar protegiendo el medio ambiente. Con la privatización inminente del monopolio de telecomunicaciones, el gobierno desea poner en funcionamiento la Comisión de Servicios Públicos que asumirá la responsabilidad de reglamentar en el ámbito jurídico y económico la gestión de la energía, las telecomunicaciones, el sector de agua y alcantarillado y los desechos sólidos. A mediados de 1993 se promulgó la legislación para establecer la Comisión de Servicios Públicos, que debía entrar en funcionamiento cuando lo determinara el Ministro de Finanzas, lo cual aún no ha ocurrido. Es preciso revisar la ley y ampliar su alcance a fin de que incluya la gestión de los desechos sólidos.
- 2.10 En la actualidad, la reglamentación económica y jurídica de las compañías de servicios públicos está dispersa en el país. Con frecuencia, la legislación que sanciona la autoridad normativa data de la fecha de establecimiento del organismo pertinente. En algunos servicios públicos la legislación es obsoleta y ha aparecido una zona gris de jurisdicción. En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, el proveedor de servicios autorregulados es también el regulador de operadores del sector privado en áreas donde se permite la competencia, tales como servicios de búsqueda de personas y de Internet.

- 2.11 Pronto se actualizarán diversas leyes relativas a los servicios públicos. A medida que el Gobierno de las Bahamas proceda con la privatización de la compañía de telecomunicaciones, revisará la legislación para actualizar las definiciones y establecerá una separación entre el regulador y los proveedores de servicios. Una propuesta de operación del Banco en el sector de recursos hídricos atenderá los aspectos relativos a la legislación y normativa de la extracción de aguas subterráneas. Una segunda operación del Banco tendrá componentes de formulación de legislación y reglamentaciones para la gestión de los desechos sólidos.
- 2.12 Con respecto a la reglamentación económica, no hay un análisis sistemático de tarifas o de la calidad de los servicios prestados. Las nuevas tarifas requieren aprobación del Gabinete y, por lo menos en un caso, deben ser aprobadas por el Parlamento. Cuando se ha permitido la participación del sector privado, los actuales arreglos regulatorios en un entorno de mercados oligopolísticos fomentan una conducta de captación de rentas por parte de los proveedores de servicios y no estimulan la eficiencia. Por consiguiente, los costos sociales y económicos probablemente siguen siendo elevados.

C. Ordenación del medio ambiente

- 2.13 A fin de dar mayor impulso a la ordenación del medio ambiente, el Gobierno de las Bahamas estableció a principios de 1990, en la Oficina del Primer Ministro, la Comisión de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de las Bahamas (Comisión BEST) como organismo coordinador nacional con atribuciones de formular y orientar las políticas, los procedimientos y la programación en materia de medio ambiente y también coordinar el proceso de examen de las propuestas de desarrollo. No obstante, la organización no tiene fondos ni personal suficientes que le permitan llevar a cabo su amplio mandato.
- 2.14 Una de las mayores exigencias ante la Comisión BEST, desde su establecimiento, ha sido la coordinación y síntesis rápida de los comentarios relativos a la evaluación del impacto ambiental entre los diversos departamentos estatales. El organismo ambiental no está bien preparado para desempeñar esta función en forma adecuada y carece de autoridad jurídica plena y de los mecanismos necesarios para desempeñar un papel central en el proceso de evaluación del impacto ambiental. En la actualidad, la Comisión BEST actúa en virtud de su ubicación en la Oficina del Primer Ministro, pero carece de mandato claramente definido y legalmente constituido. No hay políticas, legislación, normas o directrices que orienten la acción de manera coordinada. Además, carece de personal y recursos financieros adecuados, no tiene una base de datos sólida que le permita fundamentar sus decisiones y tampoco cuenta con procedimientos y mecanismos apropiados para la planificación, la formulación de políticas y el control de la calidad.

- 2.15 Mientras tanto, al no ofrecerse orientación al sector privado en cuanto a las expectativas del gobierno respecto de las evaluaciones de impacto ambiental, los urbanizadores presentan evaluaciones de todo tipo, algunas mucho más detalladas de lo necesario y otras demasiado superficiales. Además, muchos proyectos, particularmente los sometidos por urbanizadores bahameses, nunca llegan a la Comisión BEST para comentarios, y a veces se aprueban mediante el proceso de planificación física con poco o ningún examen de su impacto ambiental. Del mismo modo, las juntas locales pueden aprobar urbanizaciones de tamaño mínimo sin mayor examen, lo que dificulta evitar el impacto acumulado de una serie de pequeñas urbanizaciones que puede ser grave. En algunos casos, las iniciativas del Estado en materia de instalaciones físicas tampoco han sido objeto de un examen significativo de su impacto ambiental.
- 2.16 Para cumplir su mandato y prestar apoyo a las metas del Gobierno de las Bahamas en lo que se refiere a establecer sólidos procedimientos, políticas e instrumentos gerenciales para orientar el desarrollo y a la vez proteger los recursos ambientales, es necesario fortalecer la Comisión BEST, y ampliar su capacidad operativa así como aclarar y articular su mandato, incluso en el proceso de evaluación del impacto ambiental.
- 2.17 El Gobierno de las Bahamas reconoce que, para lograr sus objetivos, la ordenación ambiental y el desarrollo sostenible requieren un organismo coordinador que funcione con eficacia. Con ese fin, el gobierno ha solicitado asistencia para fortalecer la ordenación ambiental mediante la formulación de políticas pertinentes y el fortalecimiento institucional de la Comisión BEST, a fin de asegurar que el control de la calidad ambiental y las evaluaciones de impacto ambiental sean suficientes para fomentar un desarrollo económico sólido impulsado por el sector privado.

D. Estrategia del gobierno

- 2.18 La liberalización económica y los ajustes estructurales puestos en práctica por el Gobierno de las Bahamas han seguido la línea de la propuesta de préstamo para el sector de inversiones (PSI) formulada en 1992 ante una solicitud del gobierno, luego de experimentar tasas de crecimiento negativas en 1991-92. El préstamo propuesto se elaboró con vistas a fortalecer la competitividad de la economía, promover un entorno más favorable para la inversión privada e impedir mayores daños al medio ambiente. El nuevo gobierno, elegido más adelante ese mismo año, informó al Banco posteriormente que deseaba aplicar las reformas por su propia cuenta.
- 2.19 Reconociendo los beneficios de crear una institución independiente que regule los servicios públicos y establecer los regímenes correspondientes que deben preceder el movimiento hacia la participación del sector privado o la privatización, el Gobierno de las Bahamas desea establecer una Comisión de Servicios Públicos

plenamente funcional antes de tomar las decisiones finales sobre la estructura futura de cada servicio. En particular, para aumentar la eficiencia de los servicios e incrementar la inversión privada en cada uno, y con la debida consideración de los problemas especiales típicos de las pequeñas comunidades en islas remotas, el gobierno reconoce la necesidad de preparar un núcleo de personal que pueda hacerse cargo de la reglamentación legal, económica y de los aspectos de seguridad de las compañías que prestan servicios públicos.

- 2.20 El gobierno reconoce que, antes de la privatización, es importante formular reglamentaciones económicas y legales eficaces de los servicios públicos y acordar medidas de mitigación ambiental para aquellos que se ha programado privatizar. También reconoce que, en los casos en que la privatización no sea inminente, la operación de los servicios públicos a veces puede estar en conflicto con objetivos nacionales más amplios, tales como la protección del medio ambiente. En particular, los servicios públicos deben estar integrados en un marco de reglamentación ambiental compatible con las circunstancias económicas y sociales del país.
- 2.21 Asimismo, el gobierno desea obtener beneficios socioeconómicos mediante la separación entre quienes formulan las políticas, quienes las reglamentan y quienes prestan los servicios públicos. Reconoce, en particular, que los potenciales abusos del poder de mercado por parte del proveedor del servicio disminuyen al crearse un mecanismo de reglamentación económica y al establecerse y exigirse el cumplimiento de las normas de calidad y de servicio al cliente; que el desarrollo de un marco bien concebido es requisito previo de la calidad de la reglamentación del servicio; y que, aun cuando las circunstancias no permitan la competencia, las ganancias de eficiencia igual pueden aumentar mediante diversos mecanismos de incentivos institucionales y normativos.

E. El medio ambiente y la inversión

- 2.22 Las medidas de política, junto con una gestión macroeconómica casi siempre prudente, han contribuido a aumentar la inversión privada extranjera de alrededor del 10% al 20% del PIB anual, principalmente en negocios relacionados con el turismo en New Providence y en las Family Islands, 27 de las cuales están habitadas. El aumento de la inversión, especialmente en las Family Islands, podría tener un impacto adverso sobre el medio ambiente, de no existir las salvaguardas adecuadas y exigirse su aplicación. Las autoridades reconocen la urgente necesidad de formular reglamentaciones ambientales y desarrollar la capacidad de hacerlas cumplir a fin de mantener la tendencia de la inversión protegiendo a la vez los recursos naturales.
- 2.23 Se reconoce que hay vínculos firmes y de importancia estratégica entre el medio ambiente y los intereses económicos en las Bahamas, especialmente en el ámbito de la industria del turismo, que se basa

principalmente en el mantenimiento de un entorno saludable y estéticamente agradable. Sin embargo, hay una carencia de participación del sector privado en las actividades de ordenación ambiental. Tanto porque el sector privado puede ser la fuente principal de la degradación ambiental y porque puede verse afectado por las decisiones sobre ordenación ambiental, se considera que el aumento de su participación es esencial para que tenga éxito el desarrollo sostenible futuro.

III. EL PROYECTO

A. Objetivos

- 3.1 El objetivo general del proyecto es asistir al Gobierno de las Bahamas a establecer un marco normativo plenamente desarrollado para los sectores de energía, telecomunicaciones, agua y alcantarillado y desechos sólidos, y ayudarlo a fortalecer la capacidad institucional para la gestión y la aplicación de las políticas y medidas de protección ambiental. El logro de ambos objetivos fomentará en las Bahamas el desarrollo sostenible impulsado por el sector privado. El objetivo específico es lograr la plena operatividad y eficacia de la Comisión de Servicios Públicos y del organismo nacional para el medio ambiente — la Comisión de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de las Bahamas (Comisión BEST). En la consecución de estos objetivos, el proyecto atenderá la distribución de responsabilidades para la reglamentación ambiental a fin de clarificarlas o racionalizarlas y evitar la duplicación de funciones.

B. Componentes del proyecto

- 3.2 El proyecto tendrá dos componente: a) marco legal y normativo de los servicios públicos; y b) fortalecimiento de la ordenación ambiental. Ambos componentes tienen términos generales de referencia, que se encuentran en los archivos.

1. Componente I: Establecimiento de un sistema normativo para los servicios públicos

- 3.3 Objetivos. Mediante este componente se prestará asistencia técnica para formular todos los instrumentos jurídicos e instituir una Comisión de Servicios Públicos plenamente autónoma y funcional —adecuadamente organizada y dotada de personal y con su presupuesto independiente— para desempeñar las funciones que le asigna la legislación. Asimismo, para estudios de tarifas y preparación de manuales de operaciones y de procedimientos requeridos para la supervisión y aplicación de las reglamentaciones que regirán a las empresas públicas y privadas que prestan los servicios, así como los usuarios comerciales, industriales y residenciales de los

sectores de energía, telecomunicaciones, agua y alcantarillado y gestión de desechos sólidos.

3.4 Actividades. En el marco de este componente se contratarán servicios de consultoría para desempeñar las siguientes tareas:

- a. Revisión de la legislación vigente, propuestas de enmienda y preparación de reglamentaciones para todas las disposiciones de la Ley sobre la Comisión de Servicios Públicos.
- b. Preparación de directrices operacionales, relativas a funciones normativas clave, metodologías y necesidades de información para cada servicio reglamentado.
- c. Diseño de la estructura interna de la Comisión de Servicios Públicos, necesidades de personal, presupuesto y sistemas de información.
- d. Finalización de estudios de las tarifas de los servicios, calidad del servicio y promoción de la competencia/eficiencia para cada uno de los servicios reglamentados.
- e. Organización de un programa de capacitación para el personal de la Comisión de Servicios Públicos compuesto de cortos períodos de estudios en el exterior para familiarizar a los nuevos reguladores con los aspectos económicos y jurídicos de la reglamentación, financiados con fondos de contrapartida, seguidos por talleres, capacitación en el empleo y visitas a organismos normativos.

2. Componente II. Fortalecimiento de la ordenación del medio ambiente

3.5 Objetivos. El objetivo del componente II es asegurar el desarrollo sostenible del sector privado, respaldando al Gobierno de las Bahamas a establecer una Comisión BEST plenamente operativa, bien organizada, dotada de personal y equipada para cumplir su mandato; y ayudar a establecer una estrategia de operación apropiada entre la Comisión BEST y la Comisión de Servicios Públicos.

3.6 Específicamente, el componente II prestará apoyo para la formulación de:

- a. Una política ambiental sostenible y estrategias conexas, incluidos instrumentos de gestión y directrices provisionales para la evaluación del impacto ambiental; y desarrollo de contrapartida en la Comisión BEST. En el marco de este subcomponente, también se determinará las necesidades adicionales de personal en la Comisión BEST, se contratará nuevo personal y se perfeccionarán los términos de referencia del subcomponente 2 (véase más adelante).

- b. Un programa de fortalecimiento institucional para respaldar a la Comisión BEST en el cumplimiento de su mandato general y su capacidad de hacer seguimiento de la adopción de políticas y estrategias propuestas; y el establecimiento de un sistema de control de la calidad del medio ambiente y de vigilancia del mismo, fundamentado en las evaluaciones de impacto ambiental y permisos ambientales, que tenga por objeto evitar el impacto negativo de proyectos de desarrollo de los sectores público y privado.

Subcomponente 1: Política de medio ambiente y estrategias conexas sostenibles

- 3.7 Este subcomponente financiará experiencia técnica para formular, junto con el personal técnico de la Comisión BEST y otros organismos pertinentes, una propuesta para una política nacional sostenible relativa al medio ambiente dirigida a conciliar las prioridades económicas, sociales y ambientales del país. Las declaraciones de política y estrategia sugerirán medios de integrar los objetivos de la política relativa al medio ambiente con las políticas macroeconómicas generales de desarrollo del país, proponiendo posibles incentivos y otros instrumentos económicos con ese fin. La declaración de política propuesta también cubrirá las acciones estratégicas que se requerirán para que la política sectorial (turismo, industria, transporte, desarrollo urbano, salud, etc.) sea congruente y coherente con los objetivos ambientales.
- 3.8 Las actividades conforme al subcomponente 1 incluirán:
 - a. El examen de las políticas nacionales vigentes, propuestas para asignación de responsabilidades de ordenación de los recursos naturales e instrumentos económicos viables, preparación de una propuesta de política de medio ambiente y asistencia en las negociaciones, según se requiera.
 - b. El diseño de las directrices y procedimientos provisionales para las evaluaciones de impacto ambiental.
 - c. Capacitación interna para el personal de la Comisión BEST.

Subcomponente 2: Fortalecimiento de la capacidad institucional.

- 3.9 El proyecto financiará un asesor técnico a largo plazo (por lo menos 18 meses-experto), especializado en ordenación del medio ambiente para prestar apoyo sostenido a la Comisión BEST, y varios especialistas contratados como consultores a corto plazo. El equipo de consultores ayudará en el trabajo diario de la Comisión y formulará programas de fortalecimiento institucional dirigidos a áreas prioritarias en que la Comisión tiene deficiencias.

3.10 Las actividades financiadas en el ámbito de este subcomponente incluyen:

- a. Evaluación institucional y organizacional detallada y recomendaciones para la Comisión BEST y otros organismos que participan en la ordenación del medio ambiente.
- b. Preparación de un plan financiero de largo plazo para la Comisión BEST.
- c. Perfeccionamiento de las directrices y procedimientos de las evaluaciones de impacto ambiental y distribución a los organismos públicos y privados pertinentes para comentarios.
- d. Evaluación de la capacidad de los organismos estatales en materia de control de calidad, fiscalización y cumplimiento; definición de necesidades; y diseño de una propuesta conceptual.

C. Costo y financiamiento

3.11 El costo estimado del programa es de US\$2.022.400. Se ha pedido que el FOMIN financie US\$1.342.900 y el saldo de US\$679.500 sería provisto como fondos de contrapartida locales por el Gobierno de las Bahamas. El presupuesto detallado figura en el archivo técnico del proyecto.

D. Adquisiciones

3.12 El Gobierno de las Bahamas seguirá el procedimiento habitual del Grupo del Banco para la adquisición de bienes y servicios.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COMPONENTE	FOMIN	LOCAL	TOTAL
I. Coordinación, gerencia y administración del programa	72.000	210.000	282.000
II. Sistema normativo de los servicios públicos	605.000	346.000	950.000
1. Marco jurídico, desarrollo de sistemas normativos, establecimiento de la Comisión de Servicios Públicos y estudios conexos	482.300	226.000	708.300
2. Capacitación de personal de la Comisión de Servicios Públicos	122.200	120.000	242.200
III. Ordenación del medio ambiente	665.900	123.500	789.400
1. Formulación de política y estrategias ambientales sostenibles	102.700		
2. Desarrollo de un programa de fortalecimiento institucional para la Comisión BEST, establecimiento de un sistema de información ambiental y de un sistema de control y seguimiento de la calidad ambiental	563.200	123.500	686.700
TOTAL	1.342.900	679.500	2.022.400

E. Informes

- 3.13 El componente de la Comisión de Servicios Públicos generaría los siguientes informes técnicos:
- a. Cambios recomendados a la Ley de la Comisión de Servicios Públicos de 1993 y proyecto de reglamento de una ley revisada.
 - b. Estructura de organización recomendada para la Comisión de Servicios Públicos.
 - c. Informe sobre opciones de financiamiento para que la Comisión de Servicios Públicos asegure su independencia.
 - d. Informes sobre tarifas, medidas de promoción de la competencia, normas de calidad de los servicios e impacto ambiental de la provisión de servicios públicos.
- 3.14 El subcomponente 1 de la sección de ordenación ambiental generaría los siguientes informes técnicos:
- a. Examen y análisis integral de las políticas, leyes y reglamentaciones vigentes en materia de medio ambiente.
 - b. Análisis de viabilidad de las medidas económicas de incentivos/desincentivos para promover prácticas ambientales racionales.
 - c. Informe sobre política de desarrollo sostenible y estrategias conexas.
 - d. Informe de evaluación del sistema de gestión de la información y recomendaciones para su perfeccionamiento.
 - e. Informe de identificación de las necesidades de personal y términos de referencia para el subcomponente 2.
- 3.15 El subcomponente 2 de la sección de ordenación ambiental generaría los siguientes informes técnicos:
- a. Evaluación de necesidades de la Comisión BEST.
 - b. Formulación temprana de un plan de trabajo que cubra el período de ejecución del proyecto.
 - c. Documentación de los actuales mandatos, papeles, responsabilidades, capacidades, presupuestos, personal, actividades, etc., asociados con cada organismo estatal pertinente.
 - d. Informe sobre opciones de financiamiento de la Comisión BEST.

F. Ejecución y seguimiento

- 3.16 La Oficina del Primer Ministro será responsable directamente de la ejecución global del proyecto. La Oficina del Vice Primer Ministro y la Comisión BEST nombrarán sendos coordinadores para los componentes de servicios públicos y medio ambiente. Los dos coordinadores de cada componente seleccionarán los servicios de consultoría que se requerirán para llevar a cabo las labores bajo su responsabilidad de conformidad con los términos de referencia aprobados por el Banco. En el archivo técnico del proyecto figura un plan de trabajo detallado. Los organismos ejecutores presentarán informes de progreso cada seis meses. Después de los 12 meses de la fecha de efectividad, se realizará una evaluación de mitad de período y, a los seis meses del desembolso final, se preparará un informe de terminación del proyecto.
- 3.17 El período de ejecución del proyecto será de 24 meses y el período de desembolso cubrirá 30 meses.

IV. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL FOMIN

- 4.1 Este proyecto es plenamente congruente con el objetivo general del FOMIN de promover la inversión privada y facilitar la participación del sector privado para apoyar el desarrollo económico y social acelerado. El proyecto propuesto también cumple a cabalidad los criterios de elegibilidad de proyectos de la Facilidad de Cooperación Técnica, de conformidad con el artículo III, sección 2, del Convenio del FOMIN, que establece que los recursos del Fondo pueden utilizarse para el diseño y la ejecución de proyectos que contribuyan a crear condiciones más favorables para la inversión privada.

V. ESTRATEGIA DEL BANCO PARA EL PAÍS

- 5.1 La estrategia del Banco con respecto a las Bahamas es respaldar los empeños del gobierno para restablecer el crecimiento sostenido impulsado por el sector privado mediante el mejoramiento de la competitividad, la diversificación de la economía, el mejoramiento de los vínculos intersectoriales y el fortalecimiento de las reglamentaciones ambientales. El establecimiento de un sistema normativo plenamente funcional y confiable es esencial para atraer capital privado y empresarios para ayudar a mejorar la productividad y eficiencia en la prestación de los servicios básicos que requiere el sector de turismo, la industria principal

del país. Los programas y reglamentaciones relativos al medio ambiente son igualmente esenciales para atender las necesidades de recursos naturales a corto y largo plazo, especialmente en vista de los limitados recursos naturales de las Bahamas y su dependencia en el turismo.

MARCO LÓGICO SIMPLIFICADO

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PRESUNCIONES
META GENERAL Crear un entorno más propicio que permita aumentar la inversión privada	Mayor inversión privada nacional y extranjera en los servicios públicos	Información publicada sobre la privatización de los servicios	No continúan las acciones de privatización del gobierno
	Aumento de la inversión, con mayor diversidad geográfica, en las islas	Datos publicados sobre inversión nacional e información no publicada, pero disponible, sobre afluencias de inversión extranjera	El régimen de inversión del Gobierno de las Bahamas continúa siendo competitivo frente a los otros países de la región
Establecer para los servicios públicos un marco jurídico y reglamentario plenamente desarrollado	Está en operación una entidad reguladora de los servicios públicos con funciones adecuadas de reglamentación	Información suministrada por el Organismo Ejecutor	Implementación oportuna de los componentes del programa
Fortalecer la capacidad institucional de gestión y aplicación coercitiva de las medidas y políticas de protección ambiental	Se han instituido directrices apropiadas de EIA, se han concluido las auditorías ambientales y se ha establecido coordinación entre las instituciones	Información suministrada por el Organismo Ejecutor sobre la ejecución de los componentes del programa	Implementación oportuna de los componentes del programa para contar con un organismo ambiental fortalecido desde el punto de vista institucional y orgánico

PROYECTO DE RESOLUCION

**BAHAMAS. COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PARA
FACILITAR LA INVERSION EN EL SECTOR PRIVADO**

El Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo o al representante que él designe para que, en nombre y representación del Fondo Multilateral de Inversiones, proceda a formalizar los acuerdos necesarios con el gobierno de Bahamas, y a adoptar las medidas pertinentes para la ejecución de la propuesta de proyecto a que se refiere el documento MIF/AT-sobre cooperación técnica para facilitar la inversión en el sector privado.
2. Destinar para fines de esta resolución hasta la suma de US\$1.342.900, o su equivalente en otras monedas convertibles, con cargo a los recursos de la Facilidad de Cooperación Técnica del Fondo Multilateral de Inversiones.
3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter no reembolsable.